



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general
19 de enero de 2021
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 2457/2014* **

<i>Comunicación presentada por:</i>	Modan Mukhlisov (representado por el abogado Zhangazy Kunserkin)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado parte:</i>	Kazajstán
<i>Fecha de la comunicación:</i>	26 de octubre de 2013 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión adoptada con arreglo al artículo 92 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 4 de septiembre de 2014 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de aprobación del dictamen:</i>	30 de octubre de 2020
<i>Asunto:</i>	Trato y pena discriminatorios respecto de un recluso por motivos de religión
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Agotamiento de los recursos internos; falta de fundamentación
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; discriminación; juicio imparcial
<i>Artículos del Pacto:</i>	18 y 26
<i>Artículos del Protocolo Facultativo:</i>	2; y 5, párr. 2 b)

1. El autor de la comunicación es Modan Mukhlisov, ciudadano kazajo de etnia tártara, nacido en 1961, que cumplía una pena de prisión en la cárcel de Arkalyk en el momento de la presentación de la comunicación. Afirma que Kazajstán ha violado los derechos que lo asisten en virtud del artículo 26 del Pacto. El Protocolo Facultativo del Pacto entró en vigor para el Estado parte el 30 de septiembre de 2009. El autor está representado por el abogado Zhangazy Kunserkin.

* Aprobado por el Comité en su 130º período de sesiones (12 de octubre a 6 de noviembre de 2020).

** Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Furuya Shuichi, Christoph Heyns, David Moore, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann y Gentian Zyberi.



Los hechos expuestos por el autor

2.1 El 9 de abril de 2003, el Tribunal Municipal de Almaty condenó al autor a una pena de 25 años de prisión, que debía cumplir en un centro penitenciario con un régimen especial. El autor afirma que, mientras cumplía condena en el centro penitenciario situado en la aldea de Arshaly, se hizo musulmán practicante. Reza regularmente, estudia el Corán y observa el ayuno.

2.2 El autor era sistemáticamente objeto de un trato discriminatorio por parte de la administración del centro penitenciario de Arshaly en razón de sus creencias religiosas. Por ejemplo, con frecuencia se lo aislaba de los demás reclusos sin un motivo válido, se le privaba de asistencia médica y de la visita de sus familiares y era sometido a presiones morales y tratos crueles por la administración. La administración penitenciaria obstaculizaba constantemente sus prácticas religiosas, confiscaba sus libros religiosos y le exigía sin cesar que se afeitara la barba que, según él, lo identifica como musulmán¹.

2.3 El 17 de mayo de 2010, el Tribunal de Distrito de Arshalynskiy condenó al autor a un año (adicional) de prisión por desobedecer las órdenes de la administración del centro penitenciario².

2.4 El 6 de mayo de 2011, el Tribunal de Distrito de Arshalynskiy aprobó la solicitud de la administración penitenciaria para trasladar al autor a la cárcel de Arkalyk durante un año³.

2.5 En una fecha no especificada, el autor interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional de Kostanay por el trato discriminatorio que había sufrido y por la vulneración de su derecho a la libertad de religión por parte de los funcionarios de la cárcel de Arkalyk⁴. La denuncia fue desestimada por infundada el 21 de septiembre de 2011.

2.6 El 1 de febrero de 2013, el Tribunal de Distrito aprobó la segunda solicitud de la administración penitenciaria para trasladar al autor a la cárcel de Arkalyk durante un año y seis meses. El autor afirma que ello se debe a que reza y lleva una barba que lo identifica como musulmán⁵.

2.7 El 21 de mayo de 2013, la Junta de Apelación del Tribunal Regional de Akmolinskiy desestimó el recurso presentado por el autor contra la decisión del Tribunal de Distrito de 17 de mayo de 2010.

2.8 El 5 de agosto de 2013, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de revisión (control de las garantías procesales) que había interpuesto el autor contra las resoluciones judiciales de 17 de mayo de 2010 y 21 de mayo de 2013.

2.9 Según el autor, la decisión del Tribunal de Distrito de 17 de mayo de 2010 no es conforme a derecho porque fue objeto de discriminación por sus creencias religiosas. El autor afirma que, durante el procedimiento ante el Tribunal de Distrito, se le privó de sus derechos procesales por motivos religiosos. También afirma que no estuvo representado por un

¹ El autor no aporta ninguna prueba concreta en relación con las alegaciones formuladas en este párrafo, salvo la carta de la Fiscalía Regional de Kostanay, que, a su juicio, demuestra que había denunciado la actuación de la administración en repetidas ocasiones. No se proporcionan copias de las denuncias.

² El autor reconoce que desobedeció las órdenes de la administración del centro penitenciario relativas a la limpieza de la cárcel, pero afirma que esas órdenes tenían por objeto humillarlo y presionarlo.

³ No se proporciona copia de la decisión.

⁴ No se proporciona copia de la denuncia, pero el autor aporta la carta enviada por la Oficina Internacional de Kazajstán para los Derechos Humanos y el estado de derecho al Director de la cárcel de Arkalyk. En la carta se señala que durante las visitas realizadas por la Oficina a esa cárcel, los días 18 y 19 de octubre de 2011, se observó que el autor estaba recluso en condiciones rigurosas en una celda individual y se quejaba de su estado de salud y de la falta de asistencia médica. En cambio, según la carta de los funcionarios de dicho centro, de fecha 3 de febrero de 2012, el autor recibió, a petición propia, una asistencia médica adecuada.

⁵ Si bien no se proporciona copia de la solicitud, en la decisión del Tribunal de Distrito de 1 de febrero de 2013 se mencionan varias infracciones disciplinarias cometidas por el autor, entre otras, rezar durante una de las inspecciones matutinas, impidiendo así que la administración realizara la inspección eficazmente.

abogado en ese procedimiento⁶. Sostiene que no se le permitió defenderse o, alternativamente, que si se le permitió pero su testimonio no quedó recogido en el acta del procedimiento ante el Tribunal de Distrito⁷. Por consiguiente, el autor alega que la decisión del Tribunal de Distrito de 17 de mayo de 2010 se basó únicamente en los testimonios de los funcionarios de prisiones que lo habían acusado de desobedecer las órdenes de la administración del centro penitenciario.

2.10 El autor también sostiene que el Tribunal Regional y el Tribunal Supremo no tuvieron debidamente en cuenta las alegaciones que formuló en relación con el trato discriminatorio de que había sido víctima y con la vulneración de sus derechos procesales, sino que basaron sus decisiones únicamente en los testimonios y los argumentos de los funcionarios penitenciarios. Esa manera de resolver en los tribunales no constituye la práctica habitual, sino que refleja la política estatal discriminatoria hacia los condenados musulmanes, cuyos derechos en los tribunales no suelen respetarse.

La denuncia

3.1 El autor afirma ser víctima de discriminación, en contravención del artículo 26 del Pacto, ya que fue sistemáticamente objeto de un trato discriminatorio por parte de la administración del centro penitenciario y fue condenado y privado de sus derechos procesales durante el procedimiento ante el Tribunal de Distrito en razón de sus creencias religiosas. También afirma que el hecho de que el Tribunal Regional y el Tribunal Supremo no revisaran debidamente la decisión del Tribunal de Distrito pone de manifiesto la política estatal discriminatoria hacia los condenados musulmanes, que es contraria al artículo 26 del Pacto.

3.2 La comunicación parece plantear asimismo cuestiones relacionadas con el artículo 18 del Pacto, aunque el autor no lo invoca específicamente. El autor sostiene que la administración penitenciaria obstaculizaba sus prácticas religiosas, confiscaba sus libros religiosos y le exigía sin cesar que se afeitara la barba.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1 En una nota verbal de 27 de octubre de 2014, el Estado parte explicó que, el 9 de abril de 2003, el autor fue condenado a una pena de 25 años de prisión por robo con violencia, robo de automóvil y de armas, uso de la fuerza, falsificación de documentos, secuestro y homicidio en grado de tentativa, entre otros delitos. Durante su privación de libertad, el autor desobedeció en varias ocasiones las órdenes legítimas de la administración penitenciaria relativas a la participación en las obras de construcción y mejora que se estaban llevando a cabo en el centro. Mientras cumplía condena en la colonia núm. 161/12 en la región de Kostanay, de 2004 a 2007, fue reprendido y amonestado en cuatro ocasiones. El 24 de julio de 2009, fue trasladado al centro penitenciario núm. 166/5 de Astaná. Durante su reclusión en ese centro, el autor siguió quebrantando las órdenes legítimas de la administración y recibió una amonestación oficial en la que se le notificaba que podía incurrir en responsabilidad penal por su desobediencia.

4.2 El Estado parte observa que, de conformidad con el artículo 102 del Código de Ejecución de Penas, los presos podrán tener que participar, entre otras actividades, en las obras de construcción y mejora del centro penitenciario y su recinto sin percibir remuneración alguna. El 6 de febrero de 2010, el autor se negó a participar en esas obras. Ese mismo día, el Director del centro resolvió que el autor había infringido intencionadamente el régimen penitenciario, por lo que lo sancionó con una detención de cinco días en una celda de aislamiento. El Estado parte enumera asimismo los actos que constituyen “una infracción intencionada del régimen penitenciario” con arreglo al artículo 112 del Código de Ejecución de Penas y las sanciones previstas para esa infracción en virtud de los artículos 111, párrafo 1, y 132 de dicho Código.

⁶ En sus decisiones, el Tribunal Regional y el Tribunal Supremo señalan que el propio autor se negó a recibir la asistencia de un abogado, como demuestra su declaración escrita. No se proporciona copia de la declaración.

⁷ No se proporciona el acta del procedimiento ante el Tribunal. El autor no ha agotado los recursos internos en relación con esta cuestión.

4.3 El 5 de marzo de 2010, el autor volvió a negarse a participar en las obras de construcción, por lo que se le impuso una sanción de 16 días en régimen de aislamiento. El 25 de marzo de 2010, el autor se negó una vez más a participar en las obras de mejora del centro. Por consiguiente, el 26 de marzo de 2010 se iniciaron actuaciones penales contra él en virtud del artículo 360, párrafo 1, del Código Penal (desobediencia deliberada de órdenes legítimas de la administración de un centro de detención). El 17 de mayo de 2010, el Tribunal de Distrito de Arshalynskiy declaró al autor culpable del delito tipificado en el artículo 360, párrafo 1, del Código Penal y lo condenó a 1 año de prisión, que se sumó a la pena de 25 años de prisión en un centro penitenciario con un régimen especial. El 21 de mayo de 2013, el Tribunal Regional de Akmolinskiy confirmó la sentencia del Tribunal de Distrito, y el recurso de casación interpuesto por el abogado del autor fue desestimado.

4.4 Asimismo, dado que el autor seguía desobedeciendo las órdenes legítimas de la administración del centro e infringiendo el reglamento interno, el Tribunal de Distrito de Arshalynskiy de la región de Akmolinskiy lo condenó, el 1 de febrero de 2013, a una pena de prisión adicional de un año y seis meses. El Estado parte señala que el autor no recurrió esa decisión.

4.5 En vista de los hechos arriba mencionados, el Estado parte sostiene que la comunicación es inadmisibles. Las repetidas negativas del autor a obedecer las órdenes legítimas de la administración penitenciaria están corroboradas por pruebas, como documentos y declaraciones de testigos. Durante el procedimiento penal, el autor sostuvo que se había negado a trabajar porque consideraba que la administración del centro lo perseguía y lo sometía a trabajos degradantes. A ese respecto, el Estado parte afirma que el personal del centro penitenciario actuó de conformidad con el reglamento interno de los centros penitenciarios y que no hay motivos para considerar que la participación en las obras de construcción y mejora de un centro de detención constituya un trato degradante.

4.6 Además, la afirmación del autor de que se ha vulnerado el artículo 26 del Pacto en razón de sus creencias religiosas carece de fundamento. El Estado parte observa que la libertad de conciencia está garantizada por el artículo 22 de la Constitución. De conformidad con este artículo, el derecho a la libertad de conciencia de una persona no debe limitar o vulnerar “los derechos universales y de los ciudadanos ni sus obligaciones frente al Estado”. Nadie podrá negarse a cumplir, en razón de sus creencias religiosas, las obligaciones que le imponen la Constitución o las leyes nacionales. En virtud del artículo 12 del Código de Ejecución de Penas, se garantiza a los reclusos el derecho a la libertad de conciencia. A ese respecto, el Estado parte afirma que la administración penitenciaria garantiza las condiciones necesarias para la celebración de ritos religiosos con arreglo a las leyes y reglamentos nacionales previstos. La participación en el culto religioso es voluntaria, pero no puede infringir las normas internas del establecimiento en cuestión ni vulnerar los derechos de los demás reclusos.

4.7 El Estado parte señala asimismo que, con arreglo a la legislación penal, un recluso puede dirigirse, por escrito y verbalmente, a la administración de un centro de detención, entre otras instancias, para formular quejas, sugerencias y solicitudes. También puede hacerlo ante los tribunales nacionales, la Fiscalía u otras autoridades del Estado, y ante instituciones que trabajan en la esfera de los derechos humanos y las libertades. En ese sentido, el Estado parte sostiene que el autor nunca presentó una queja ante las autoridades e instituciones antes mencionadas.

4.8 Asimismo, el Estado parte proporciona información sobre los antecedentes legislativos del establecimiento del mecanismo nacional de prevención para la prevención de la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, y señala que representantes de ese mecanismo han visitado en varias ocasiones el centro penitenciario núm. 166/5; sin embargo, el autor nunca ha presentado una queja ante el mecanismo por el trato injustificado del que presuntamente ha sido objeto.

4.9 El Estado parte sostiene que, en virtud del artículo 9, párrafo 2, del Código de Ejecución de Penas, los reclusos están obligados a obedecer y observar las normas y el reglamento internos del centro de detención, así como las órdenes legítimas de la administración y otras autoridades responsables de la ejecución de una pena. El motivo por el que se sometió al autor a un régimen de prisión por un período de un año y seis meses fue

su continuo incumplimiento del reglamento interno del centro penitenciario. Las sanciones disciplinarias impuestas al autor estaban justificadas y su alegación de que se ha vulnerado su derecho a la libertad de religión es manifiestamente infundada.

4.10 Además, el Estado parte señala que el autor ha recibido toda la atención sanitaria necesaria y no ha sido discriminado en la prestación de tratamiento médico. Enumera asimismo los tratamientos y exámenes médicos específicos que se le han facilitado.

4.11 En conclusión, el Estado parte sostiene que el autor no agotó todos los recursos internos disponibles antes de presentar la comunicación ante el Comité, que las autoridades penitenciarias y los tribunales han respetado las garantías establecidas en el artículo 26 del Pacto y que, por lo tanto, las reclamaciones del autor son inadmisibles en virtud del artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo del Pacto.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte

5.1 El 4 de marzo de 2015, el autor presentó sus comentarios sobre las observaciones del Estado parte, en los que reiteraba que se había hecho musulmán practicante durante su reclusión. Reconoce que fue condenado a 25 años de prisión por haber cometido delitos muy graves. Sin embargo, sostiene que esto no puede servir como justificación para discriminarlo por motivos religiosos.

5.2 El autor formula además una observación general en el sentido de que la administración de los centros de detención del Estado parte confisca constantemente los libros religiosos. A veces, esto se justifica por la necesidad de verificar si esos libros contienen información sobre extremismo o terrorismo. En 2012, se modificó el Código Penitenciario para establecer la prohibición de llevar barba y bigote durante la privación de libertad. A ese respecto, el autor señala que fue sancionado por llevar barba, a raíz de lo cual fue trasladado a una cárcel con un régimen de privación de libertad más estricto en aplicación de la decisión del Tribunal de Distrito de Arshalynskiy de la región de Akmolinskiy de 13 de febrero de 2013.

5.3 El autor cita ejemplos de malos tratos y actos de persecución contra reclusos musulmanes en diferentes centros de detención del Estado parte. Señala que, en enero de 2015, la administración del centro de detención mantuvo una reunión con representantes de la comunidad islámica a fin de mejorar la situación de los presos musulmanes, facilitar la comprensión del islam y detectar formas de extremismo religioso. Sin embargo, toda la discusión se redujo a aclaraciones sobre los ritos, la plegaria y las diferencias entre las distintas ramas del islam⁸.

5.4 El autor afirma que el 5 de febrero de 2015 fue sancionado por la administración penitenciaria por haber rezado. Se quejó de ello a un representante de la Oficina del Ombudsman, al que explicó que había sido sancionado por rezar “en un horario y un lugar prohibidos”⁹. El 7 de febrero de 2015, el autor también interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Astaná por esa sanción disciplinaria¹⁰.

Observaciones del Estado parte sobre el fondo

6.1 En una nota verbal de 6 de agosto de 2015, el Estado parte hizo notar que había cumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del Pacto. Describió, en particular, las novedades introducidas recientemente en el sistema penitenciario en lo que respecta a sus obligaciones en virtud del artículo 10 del Pacto. En 2014 se presentó ante la Fiscalía General un documento conceptual sobre el proyecto titulado “Diez medidas para reducir la población carcelaria”.

6.2 En enero de 2015 entró en vigor el nuevo Código de Ejecución de Penas, que mejoraba la protección de los derechos de los reclusos. Por ejemplo, el Código garantiza el derecho de los reclusos a presentar sugerencias y quejas ante las autoridades penitenciarias, los órganos

⁸ El autor no ofrece más detalles.

⁹ No se especifican la fecha exacta ni las circunstancias de la queja presentada por el autor ante la Oficina del Ombudsman.

¹⁰ El autor ha facilitado una copia de su denuncia de 7 de febrero de 2015.

administrativos superiores de supervisión, los tribunales y las fiscalías y las asociaciones públicas, así como ante las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos. Con arreglo a la ley, los reclusos tienen derecho a recibir asistencia jurídica cualificada. El nuevo Código de Ejecución de Penas también prevé mecanismos de protección de los derechos de los reclusos en el marco de una supervisión institucional, fiscal y pública.

6.3 Tras la aprobación por el Gobierno del programa de mejora del sistema penitenciario para 2012-2015, 15 comisiones de supervisión pública funcionan actualmente en todas las regiones del Estado. Además, la financiación del sistema penitenciario aumenta cada año. En los pabellones de los establecimientos penitenciarios donde residen los reclusos se aplican estrictas normas sanitarias y de higiene.

6.4 Por lo que respecta a la aplicación del artículo 18 del Pacto, el Estado parte afirma que la Constitución y la Ley de Actividades y Asociaciones Religiosas garantizan el derecho a la libertad de conciencia y de religión. El artículo 22, párrafo 1, de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia. Sin embargo, el Estado parte explica que, de conformidad con el artículo 22, párrafo 2, de la Constitución, el derecho a la libertad de conciencia no debe condicionar o limitar los derechos humanos y civiles universales ni las responsabilidades frente al Estado.

6.5 En cuanto al fondo de la comunicación, el Estado parte sostiene que el autor es musulmán practicante desde 1996. Según el autor, el 5 de febrero de 2015, alrededor de las 6.30 horas, los funcionarios penitenciarios interrumpieron su plegaria cuando comenzaron a realizar un registro en las celdas. El Estado parte refuta la afirmación del autor de que esa acción constituye una vulneración sistemática de sus derechos religiosos y alega que el registro se llevó a cabo de acuerdo con el horario del centro penitenciario, que se informó del registro a todos los reclusos y que todos ellos abandonaron la celda, salvo el autor, que no reaccionó y siguió rezando. Mientras esperaba a que el autor terminara su rito, el oficial jefe le pidió de nuevo que abandonara la celda, a lo que el autor respondió que presentaría una queja. No se confiscó ningún libro religioso ni se aplicaron medidas disciplinarias al autor a raíz del registro. Además, según la rutina diaria del centro penitenciario, entre las 6.00 horas y las 6.30 horas, los presos pueden hacer sus ejercicios matutinos, si así lo desean, hacerse la cama y ocuparse de su higiene personal, pero esta franja horaria no se considera tiempo libre privado para ellos.

6.6 El Estado parte niega que los funcionarios del centro penitenciario núm. 166/5 vulneraran el derecho del autor a la libertad de religión. Afirma que, con arreglo al Código de Ejecución de Penas, el reglamento interno del centro penitenciario o del órgano de ejecución de penas debe observarse debidamente durante la práctica religiosa, y todos los actos que impliquen el incumplimiento de las disposiciones del Código de Ejecución de Penas u otra legislación del Estado parte están prohibidos. El Estado parte sostiene que el autor trató de practicar sus ritos religiosos en un horario inapropiado, es decir, contrario al reglamento interno del centro penitenciario. El Estado parte explica que la ley también exige que todos los reclusos que se encuentran en los establecimientos penitenciarios tengan un aspecto aseado, lo cual es incompatible con llevar barba.

6.7 El Estado parte aclara también que las prácticas religiosas del autor solo se obstaculizaron porque este no cumplió el reglamento interno del centro penitenciario, que los funcionarios del centro no confiscaron ningún libro religioso del autor y que este no fue objeto de ninguna medida disciplinaria posteriormente. Con arreglo al artículo 6 de la Ley de Actividades y Asociaciones Religiosas y al párrafo 6 del Decreto núm. 503 del Ministro del Interior, de 8 de agosto de 2014, relativo a la creación de un entorno propicio para el ejercicio del culto en las cárceles, los libros religiosos y otros materiales de contenido religioso, así como los objetos que tengan un significado religioso, solo estarán permitidos en los centros penitenciarios si han sido examinados antes por un experto en teología. Los reclusos musulmanes no tienen prohibido rezar. Sin embargo, al hacerlo no deben infringir el reglamento interno ni vulnerar los derechos de los demás reclusos. Todos los reclusos están autorizados a practicar ritos religiosos individuales en sus celdas, siempre que ello no obstaculice el buen funcionamiento del centro penitenciario, no infrinja el reglamento interno y no limite los derechos e intereses legítimos de otras personas. Además, de conformidad con el párrafo 10 del reglamento interno de los centros penitenciarios, aprobado en virtud de la

orden núm. 819 del Ministro del Interior, de 17 de noviembre de 2014, los presos deben tener un aspecto aseado, lo que significa llevar el pelo corto (no más largo de 1,5 cm —con excepción de las mujeres), el bigote bien cuidado y la barba afeitada.

6.8 El Estado parte afirma asimismo que el autor no ha cumplido condena en los otros establecimientos penitenciarios mencionados en su comunicación (núms. 159/17 y 159/25, situados en la región de Karagandinsk). En cualquier caso, las administraciones de esos establecimientos tampoco vulneran el derecho de los reclusos a la libertad de religión, y los representantes del mecanismo nacional de prevención y de la comisión de supervisión pública que inspeccionaron los centros no observaron ninguna violación de los derechos humanos, incluida la discriminación por motivos de religión o de origen étnico.

6.9 En cuanto al derecho del autor a que se considere la posibilidad de otorgarle la libertad condicional, el Estado parte explica que, con arreglo al Código Penal, cuando la pena se ha impuesto por la comisión de los delitos más graves, solo puede solicitarse la libertad condicional cuando se han cumplido como mínimo dos tercios de la duración total de la pena. Por consiguiente, el autor solo podía tener derecho a la libertad condicional a partir del 20 de enero de 2019.

Información adicional presentada por las partes

7.1 El 7 de octubre de 2015, la hermana del autor alegó que la fecha para que su hermano pudiera solicitar la libertad condicional se había aplazado de 2016 a 2019 como consecuencia de la discriminación de que había sido objeto por sus creencias religiosas.

7.2 En una nota verbal de 1 de febrero de 2016, el Estado parte rebatió los argumentos relativos a la interpretación de las normas aplicadas a su libertad condicional.

7.3 El Estado parte reitera que el autor debe cumplir como mínimo dos tercios de la duración total de su pena antes de que el tribunal pueda examinar su petición de libertad condicional. La hermana del autor interpretó erróneamente las circunstancias de la reclusión de este, a saber, no tuvo en cuenta la pena adicional que se le impuso el 17 de mayo de 2010.

7.4 El Estado parte explica además que la pena impuesta al autor el 17 de mayo de 2010 fue examinada en el marco del procedimiento de revisión por el Tribunal Supremo, que no encontró motivos para revisar la condena. El Estado parte también afirma que las alegaciones del autor de que los tribunales nacionales estaban predispuestos en su contra no están fundamentadas ni corroboradas por la documentación que obra en el expediente.

7.5 El Estado parte reitera que el autor solo fue sancionado en el centro penitenciario por haberse negado en repetidas ocasiones a cumplir sus obligaciones laborales. No se le impusieron medidas disciplinarias por llevar barba o practicar su religión.

7.6 El 29 de agosto de 2016, la hermana del autor aportó un poder para actuar en nombre de su hermano y una copia de la denuncia que había interpuesto en nombre de este ante el Tribunal de Distrito de Arshalynskiy.

7.7 En una nota verbal de 30 de enero de 2017, el Estado parte recuerda nuevamente el contenido de las sentencias dictadas por los tribunales nacionales contra el autor. Añade que, el 4 de noviembre de 2016, el Tribunal de Distrito de Arshalynskiy admitió parcialmente a trámite los recursos presentados por el autor y su hermana en relación con las condenas impuestas a este. Sin embargo, el Tribunal desestimó las alegaciones del autor relativas a la retirada de los cargos por robo a mano armada en banda organizada y la consiguiente reducción de la pena.

7.8 El Estado parte explica que el Tribunal decidió que no debía modificarse la pena impuesta al autor.

7.9 El 23 de diciembre de 2016, en apelación, el Tribunal Regional de Akmolinskiy revocó la decisión del tribunal inferior de 4 de noviembre de 2016 por irregularidades de procedimiento en la fase de admisión a trámite de la petición presentada por el representante del autor. A raíz de ello, el 13 de enero de 2017, el autor presentó otra petición de revisión de su pena, que, en la fecha en que el Estado parte presentó sus observaciones, seguía pendiente ante el Tribunal de Distrito de Arshalynskiy.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

8.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

8.2 En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

8.3 El Comité observa que, según el autor, no estuvo representado por un abogado ni se le permitió defenderse personalmente en el procedimiento ante el Tribunal de Distrito. El autor también aduce que el Tribunal Regional y el Tribunal Supremo lo discriminaron durante el procedimiento penal al no tener debidamente en cuenta sus alegaciones relativas a la vulneración de sus derechos procesales. Sin embargo, el Comité observa que estas alegaciones no se han planteado en la jurisdicción interna para que los tribunales nacionales tengan la oportunidad de examinarlas y, de confirmarse su veracidad, establecer la correspondiente reparación. A falta de cualquier otra información o explicación pertinente en el expediente, el Comité considera que el autor no ha agotado los recursos internos disponibles, por lo que considera que esta parte de la comunicación es inadmisibile en virtud del artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo.

8.4 El Comité toma nota de las afirmaciones del autor de que es víctima de discriminación por sus creencias religiosas, ya que se le impuso una condena adicional, fue privado de sus derechos procesales durante el procedimiento judicial, no se rebajó su pena y no se consideró la posibilidad de concederle la libertad condicional. En opinión del autor, ello pone de manifiesto la política estatal discriminatoria hacia los condenados musulmanes. El Comité observa que el Estado parte rechaza la reclamación del autor relativa a su discriminación y sostiene que este fue condenado a una pena adicional de prisión debido a su reiterada negativa a cumplir el reglamento interno del centro penitenciario y a participar en las obras de construcción y mejora, como se exige a todos los reclusos. El Comité también toma nota de la afirmación del Estado parte de que, cuando la pena se ha impuesto por la comisión de los delitos más graves, solo puede solicitarse la libertad condicional cuando la persona declarada culpable ha cumplido como mínimo dos tercios de la duración total de la pena, lo que en el caso del autor no sería antes del 20 de enero de 2019¹¹. A la luz de las consideraciones anteriores y a falta de más información o explicación pertinente en el expediente, el Comité concluye que la reclamación del autor en relación con el artículo 26 del Pacto no está suficientemente fundamentada a efectos de su admisibilidad, por lo que es inadmisibile en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

8.5 El Comité constata que el autor ha afirmado que fue objeto de un trato discriminatorio por parte de la administración penitenciaria debido a sus creencias religiosas, lo que también constituye una violación del artículo 26 del Pacto. Según el autor, la administración penitenciaria obstaculizaba su práctica religiosa, confiscaba sus libros religiosos y le exigía sin cesar que se afeitara la barba. El Comité observa que el Estado parte afirma que, con arreglo al Código de Ejecución de Penas, los reclusos están obligados a cumplir las normas y el reglamento internos del centro de detención, pero el autor incumplió varias veces las normas internas, por lo que se le impusieron sanciones disciplinarias, y que, de conformidad con la modificación introducida en 2012 en el Código Penitenciario, todos los reclusos tenían prohibido llevar barba o bigote. El Comité observa también que, según el Estado parte, el autor no fue objeto de un trato diferente al de los demás reclusos del mismo centro más allá de la aplicación y ejecución ordinaria de las normas internas. En relación con las alegaciones del autor de que le confiscaron publicaciones religiosas, el Comité observa que, si bien el autor insiste en que la administración penitenciaria confiscó sus libros religiosos, el Estado parte sostiene que los funcionarios del centro no confiscaron ningún libro religioso perteneciente al autor. El Comité considera que el autor no ha especificado en qué momento ni en qué circunstancias se le incautaron dichos libros. Considera también que el autor no ha

¹¹ La comunicación se presentó al Comité el 26 de octubre de 2013.

proporcionado ninguna información o explicación que indique que fue objeto de un trato diferente al de los demás reclusos del mismo centro más allá de la aplicación y ejecución ordinaria de las normas internas. Por consiguiente, el Comité llega a la conclusión de que la reclamación del autor en relación con el artículo 26 no está suficientemente fundamentada a los efectos de su admisibilidad y, por lo tanto, es inadmisibile en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

8.6 No obstante, el Comité considera que, si bien el autor no lo invoca expresamente, los hechos expuestos en relación con sus prácticas religiosas y la prohibición de dejarse barba que se alegan en el marco del artículo 26 plantean cuestiones relacionadas con el artículo 18 del Pacto. Observa que el Estado parte no ha negado haber obstaculizado la práctica religiosa del autor ni haberle exigido que se afeitara la barba.

8.7 El Comité estima que las reclamaciones formuladas por el autor en relación con el artículo 18 del Pacto sobre la obstaculización de su práctica religiosa y la exigencia reiterada de que se afeitara la barba han sido suficientemente fundamentadas a efectos de su admisibilidad. Por consiguiente, las declara admisibles y procede a examinarlas en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

9.1 El Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

9.2 El Comité observa que, según el autor, la administración penitenciaria obstaculizaba constantemente sus prácticas religiosas y le exigía que se afeitara la barba. Observa también que el Estado parte afirma que el autor fue objeto de medidas disciplinarias en el centro penitenciario solo por negarse reiteradamente a cumplir sus obligaciones laborales y no por llevar barba y practicar su religión. El Estado parte ha sostenido asimismo que, de conformidad con el reglamento interno de los centros penitenciarios, los reclusos deben tener un aspecto aseado, lo que significa llevar el pelo corto, el bigote bien cuidado y la barba afeitada.

9.3 El Comité reafirma que la libertad de manifestar la religión o las creencias mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza abarca una amplia gama de actividades y que el concepto de culto se extiende a los actos rituales y ceremoniales con los que se manifiestan las creencias, así como a las diversas prácticas que son parte integrante de tales actos¹². El Comité recuerda que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias no es absoluta y puede ser objeto de limitaciones que prescriba la ley y sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás¹³. El requisito de necesidad implica que la restricción debe ser proporcional en gravedad e intensidad al propósito que se persigue y no puede convertirse en la norma¹⁴. El Comité recuerda además que incumbe al Estado parte demostrar que las restricciones impuestas a los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 18 del Pacto eran necesarias y fueron proporcionadas.

9.4 En cuanto a la obstaculización de la práctica religiosa del autor, el Comité observa que, según el Estado parte, todos los reclusos están autorizados a practicar ritos religiosos individuales en sus celdas, siempre que ello no obstaculice el buen funcionamiento del centro penitenciario, pero el autor trató de hacerlo en un horario inapropiado. El Comité considera que el mantenimiento del orden dentro del centro hace necesarias ciertas restricciones. A este respecto, es necesario que las actividades comunes y colectivas en que participan todos los reclusos, como las obras de construcción y los registros, se lleven a cabo en un horario preciso e, incluso si se obstaculiza la práctica religiosa durante estas actividades programadas, tal limitación no puede considerarse desproporcionada al propósito de mantener el orden en el

¹² *Boodoo c. Trinidad y Tabago* (CCPR/C/74/D/721/1996), párr. 6.6. Véase también la observación general núm. 22 (1993) del Comité, párr. 4.

¹³ *Malakhovsky y Pikul c. Belarús* (CCPR/C/84/D/1207/2003), párr. 7.2, y *Prince c. Sudáfrica* (CCPR/C/91/D/1474/2006), párr. 7.2.

¹⁴ Observación general núm. 22, párr. 8.

centro penitenciario, ya que nada indica que la práctica religiosa deba llevarse a cabo en ese momento en concreto. Por consiguiente, el Comité llega a la conclusión de que, en el presente caso, la obstaculización de la práctica religiosa del autor no constituye una violación del artículo 18, párrafo 1, del Pacto.

9.5 En cuanto a la exigencia impuesta al autor de que se afeitara la barba, el Comité observa que, si bien el Estado parte afirma que, de conformidad con el reglamento interno de los centros penitenciarios, los reclusos deben tener un aspecto aseado, lo que significa llevar el pelo corto (no más largo de 1,5 cm —con excepción de las mujeres), el bigote bien cuidado y la barba afeitada, no explica la razón por la que esas medidas son necesarias. Sin embargo, el Comité señala que las personas que están sometidas a algunas limitaciones legítimas, tales como los presos, siguen disfrutando de sus derechos a manifestar su religión o creencias en la mayor medida que sea compatible con el carácter específico de las limitaciones que se les imponen. En ese sentido, el Comité recuerda que al interpretar el alcance de las cláusulas de limitación permisibles, los Estados partes deberían partir de la necesidad de proteger los derechos garantizados por el Pacto. Las limitaciones impuestas deben estar prescritas por la ley y no deben aplicarse de manera que vicie los derechos garantizados en el artículo 18. Las limitaciones solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente y guardar la debida proporción con la necesidad específica de la que dependen¹⁵. Sin embargo, en el presente caso el Comité observa que, a diferencia de lo que ocurre con la necesidad de mantener un horario fijo para las actividades de los reclusos, no se ha explicado por qué llevar barba dificultaría el mantenimiento del orden en la cárcel. Por consiguiente, el Comité considera que el Estado parte no ha justificado las restricciones a la manifestación de la religión del autor y concluye que la prohibición general de llevar barba, que se deja como expresión de la fe musulmana, es contraria a la libertad de manifestar la propia religión y, por lo tanto, equivale a una violación del artículo 18, párrafo 1, del Pacto.

10. El Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación por el Estado parte de los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 18, párrafo 1, del Pacto.

11. De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Ello implica que debe ofrecer una reparación integral a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido vulnerados. Por consiguiente, el Estado parte tiene, entre otras, la obligación de adoptar las medidas necesarias para proporcionar al autor una indemnización adecuada y de revisar el Código Penitenciario de 2012. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

12. Teniendo presente que, por haber llegado a ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte ha reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, con arreglo al artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso efectivo cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen del Comité. Se pide asimismo al Estado parte que publique el presente dictamen y que le dé amplia difusión en los idiomas oficiales del Estado parte.

¹⁵ *Ibid.*